

Perspectivas

Suplemento de Análisis Político



Febrero 2026
Edición No. 189

1. Desafíos para una transición compleja

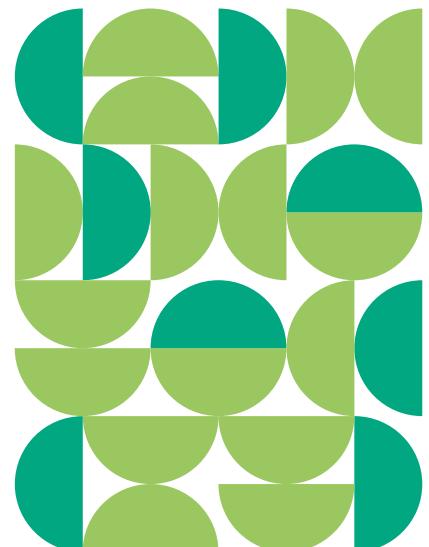
La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación militar el pasado enero representó un golpe estratégico para el andamiaje internacional que sostiene a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Venezuela fue sostén principal tanto en el ámbito económico y político durante las pasadas dos décadas. Ese hecho marca un hito en la crisis que el régimen nicaragüense enfrenta desde que estallaron las protestas sociales del 2018.

Convergencias desfavorables

La sucesión dinástica que los Ortega-Murillo pretenden completar para asegurar la continuidad de su proyecto familiar autoritario, inició el 2026 en un contexto marcado por la convergencia de varios factores que no son favorables. En primer lugar, el respaldo a la figura partidaria con la que se cobijan, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se encuentra en su punto más bajo en la historia reciente del sandinismo, apenas rozando el 12 %; la pretendida sucesión de Daniel Ortega por Rosario Murillo, su esposa y nombrada copresidenta, atraviesa un momento crítico por su falta de liderazgo y legitimidad, pero su terca decisión de tomar el control total del poder.

La purga interna que Murillo ha emprendido para lograr ese control, desplazando y encarcelando a figuras prominentes del orteguismo, militantes, funcionarios públicos y otros simpatizantes, ha conllevado altos costos políticos especialmente entre quienes conforman su propia estructura de poder.

En el ámbito económico, los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos nicaragüenses fuera del CAFTA DR se incrementarán gradualmente del 0 % en 2026, al 10 % en 2027 y 15 % en 2028, además del 18 % impuesto en 2025, con la advertencia de Washington de modificar el cronograma en caso de que persistan abusos laborales, violaciones de



derechos humanos y deterioro institucional. A eso se suma la campaña emprendida por Washington desde la segunda mitad del 2025 exigiendo la liberación de personas prisioneras políticas y cuestionando abiertamente la copresidencia de Murillo.

La persistencia del rechazo internacional, junto con las exigencias de liberar a todas las personas presas políticas y abrir una transición democrática, se mantienen aun cuando conflictos trascendentales acaparan la atención de la comunidad internacional global. La resolución de la OEA a inicios de febrero, el foro hemisférico más importante, evidencia el creciente aislamiento del régimen y marca una nueva pauta de interés de ese foro multilateral. Las reacciones de Rusia y China ante la acción de Estados Unidos en Venezuela y el incremento de las presiones a Cuba, en el marco de su nueva Estrategia de Seguridad y la nueva Doctrina Donroe, les deja claro a los Ortega Murillo, que sus grandes aliados los han dejado solos.

Cautela ante los nuevos escenarios

Las reacciones de la dictadura a las presiones de Washington sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua se sintetizan en una palabra: cautela. Los acontecimientos en Venezuela provocaron un temor evidente en la cúpula orteguista; temor que se ha incrementado en la medida que avanza el tiempo y se extendieron las presiones a Cuba.

La cautela se expresa en un evidente cambio de la retórica incendiaria contra Estados Unidos por un mutis muy elocuente que deja en claro su intención de no incomodar porque ciertamente, los escenarios cambiaron sustantivamente



El proyecto estratégico de los Ortega Murillo es apuntalar una dinastía familiar. En eso han empeñado sus esfuerzos incluso desde antes que Daniel Ortega regresara a la presidencia en 2007. En el camino, Rosario Murillo se ha erigido en la sucesora inmediata de Ortega por encima de cualquier otra persona del clan familiar y del círculo de allegados, tomando el control de la estructura de poder. Los ocho años transcurridos desde la rebelión cívica del 2018, han desgastado seriamente al régimen de manera que en la actualidad se sostiene solamente con represión, fuerza y graves violaciones de derechos humanos. Pero ellos no han cejado en su empeño autoritario.

A diferencia de Venezuela, la importancia que Nicaragua reviste para Estados Unidos se relaciona más con su posición geoestratégica en la zona conocida como Cuenca del Gran Caribe y por la influencia de China en la región centroamericana. Lograr avances significativos en Venezuela, Cuba y Nicaragua es un punto de relevancia para la administración Trump que quiere posicionarse de manera favorable en las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre próximo, compareciendo con victorias contundentes en el ámbito internacional ante el descontento interno provocado por las políticas migratorias internas.

Colocada en una posición de fuerza en el hemisferio, la administración estadounidense

posee un amplio repertorio de medidas de presión del que puede hacer uso en contra de la dictadura Ortega Murillo. Tanto Venezuela como Cuba están enviando claras señales de buscar entendimientos con Washington, declarando públicamente su disposición de negociar y aceptando condiciones. Nicaragua no se queda atrás y la evidencia más clara es el sorprendente mutismo de los Ortega-Murillo. Es probable que su intención sea adoptar esa actitud para sortear la ola del período Trump, pero al menos en el caso de Nicaragua, lo cierto es que el régimen está sumamente debilitado y la sucesión se puede convertir en un punto de quiebre.

Es posible dibujar diversos escenarios. De hecho, la misma dictadura y los actores de la oposición se han dado a la tarea de identificar algunos, con diferentes matices, que se pueden combinar entre sí o puedan dar salida a configuraciones híbridas.

Una de las variantes es que la dictadura, pese a su carencia de legitimidad interna y externa, logra afianzarse en el poder y consolidar el control ejercido por Murillo -con o sin Ortega en la palestra- o por una figura designada por ella. En este marco, las tensiones y contradicciones dentro del orteguismo son contenidas, mientras el aparato represivo se mantiene como pilar de sostentimiento del régimen. La

presión internacional resulta insuficiente o se diluye, y la oposición no consigue articular una estrategia capaz de forzar una transición democrática. Las elecciones de 2027 se convertirían, nuevamente, en una farsa sin garantías. Este escenario es el menos probable debido al rechazo nacional, el aislamiento político del régimen, la presión de Estados Unidos como un actor de primer orden, y las condiciones internacionales actuales, pero no puede descartarse por completo.

Una segunda posibilidad podría ser el de una “transición” controlada desde el régimen, sea por los propios Ortega-Murillo u otros de la cúpula orteguista, que impulsan ajustes al modelo totalitario, pero preservando sus intereses esenciales de impunidad y las fortunas acumuladas. La represión adoptaría formas menos brutales; mientras un sector de la oposición se adaptaría a estas condiciones, renunciando a demandas fundamentales y sometiéndose a concesiones parciales. En este contexto, las elecciones de 2027 se realizarían con cambios cosméticos en la legislación electoral y con la participación de fuerzas políticas previamente filtradas o toleradas por el régimen.

En este escenario la comunidad internacional estaría dispuesta a soslayar la ausencia de transformaciones estructurales. Visto el papel



“

Una de las variantes es que la dictadura, pese a su carencia de legitimidad interna y externa, logra afianzarse en el poder y consolidar el control ejercido por Murillo -con o sin Ortega en la palestra- o por una figura designada por ella.

”

de Estados Unidos, este escenario implicaría una negociación con interlocutores del régimen que no formen parte directa de la familia Ortega-Murillo. Sin embargo, la dictadura tiene poco que ofrecer más allá de revertir concesiones otorgadas a empresas chinas, retirar dispositivos rusos de espionaje o hipotéticamente, otorgar concesiones estratégicas a empresas estadounidenses, como podrían ser los derechos para la construcción de un canal interoceánico.

Está claro con lo ocurrido en Venezuela que Washington no busca necesariamente promover una transformación democrática o gobiernos afines ideológicamente, sino estabilidad y seguridad de sus intereses con administradores funcionales, que incluso pueden provenir de las mismas estructuras del poder instalado. De manera que una variante probable es el desplazamiento de Ortega y Murillo y su sustitución por otras figuras útiles a los intereses estadounidenses.

Existe también la posibilidad de un tercer escenario más acorde con las expectativas y deseos de la mayoría de la población nicaragüense. En este, se avanza hacia una transición democrática como efectos de la presión internacional, Washington incluido, y la acción de las fuerzas prodemocracia, obligando al régimen a restituir libertades y derechos fundamentales; organizar elecciones transparentes y observadas en 2027, para dar paso a un proceso democrático de reconstrucción institucional y política.



Nuevos y viejos desafíos de la oposición

Es difícil explicar las complejidades que implican cada uno de estos escenarios; pero es posible identificar los nuevos y viejos desafíos que plantean a lo que suele llamarse oposición nicaragüense, que en realidad, es un amplio y diverso espectro de fuerzas sociales y políticas, dentro y fuera del país. En el exilio, las organizaciones incluyen redes, agrupaciones político-partidarias, movimientos sociales y sociedad civil, entre otros; dentro del territorio, persisten grupos de ciudadanos en resistencia. En los dos ámbitos hay un poderoso potencial para articularse y actuar beligerantemente en el momento de una apertura, por mínima que sea.

Por las condiciones del estado de terror impuesto en Nicaragua, la mayor parte de la acción política se realiza desde el exterior, donde los diferentes grupos y actores tienen coincidencias fundamentales a pesar de que no están aglutinada en un bloque mayoritario. Las coincidencias se refieren a la necesidad de poner fin al régimen de los Ortega-Murillo; el compromiso de efectuar el cambio político por la vía pacífica y cívica; la responsabilidad de hacer justicia a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad; y el reconocimiento del papel relevante que juega la comunidad internacional, en particular Estados Unidos.

Las diferencias ideológicas influyen en las perspectivas sobre el papel de los distintos actores en la transición y la Nicaragua post-Ortega, provocando dificultades en la conformación de una plataforma o frente amplio unitario. De ahí que uno de los desafíos más importantes de las fuerzas opositoras es construir una ruta compartida que sustente un discurso y acciones complementarias sin renunciar a sus identidades.

Otro de los desafíos es formular una visión común que identifique la situación actual, a partir de las enseñanzas de la experiencia venezolana y reconocer el papel que corresponde

a las fuerzas democráticas. Lograr esta visión común es la piedra angular para asumir otros desafíos. La definición de una ruta hacia la transición implica establecer demandas prioritarias en cualquier escenario como la liberación incondicional de todas las personas prisioneras políticas, el cese de la represión, la restitución de libertades ciudadanas, el retorno seguro de exiliados y desnacionalizados, el restablecimiento de las organizaciones civiles y reformas electorales mínimas para unas elecciones legítimas. La construcción de consensos en relación a la ruta no requiere una articulación orgánica.

En todos estos años y luego del desgaste que también han experimentado los actores de oposición, uno de los desafíos más significativos es conseguir reconocimiento y legitimidad de la ciudadanía representando sus demandas más sentidas, conectando empáticamente con sus preocupaciones cotidianas, transmitiendo la convicción de que solo en democracia es posible enfrentar esos problemas de la mejor manera. También es indispensable ofrecer a los funcionarios públicos, incluidos oficiales del ejército y miembros de la policía que no han estado involucrados en violaciones de derechos humanos o actos de corrupción, que tienen un lugar en una Nicaragua democrática.

La presión internacional, especialmente de Estados Unidos, es un factor crítico para

acelerar el momento de una transición democrática; en ese sentido, uno de los desafíos más importantes consiste en abrir espacios de interlocución y diálogo con actores internacionales clave, de manera que la oposición nicaragüense tenga un papel activo procurando las condiciones necesarias para el cambio.

Prepararse para una eventual negociación es una responsabilidad ineludible porque ese momento llegará, más temprano que tarde, por lo tanto las fuerzas democráticas deben prepararse desde ya, contribuyendo cada una con acciones complementarias. Ello implica definir objetivos, condiciones y límites claros, asumiendo conscientemente que toda negociación supone concesiones entre las partes, en correspondencia con la fuerza que les sustenta.

Algunos de estos desafíos no son nuevos. Están planteados desde 2018; sin embargo, adquieren relevancia y aparecen otros nuevos en la medida que las condiciones del contexto van variando. En ciertos casos hay avances, pero todavía queda trabajo por hacer considerando las complejidades de los escenarios que se presentan en el horizonte. Los actores nicaragüenses pro democracia, especialmente los liderazgos políticos, tienen la responsabilidad de asumir estos retos con compromiso y madurez. El tiempo está llegando.

“La definición de una ruta hacia la transición implica establecer demandas prioritarias en cualquier escenario como la liberación incondicional de todas las personas prisioneras políticas, el cese de la represión, la restitución de libertades ciudadanas, el retorno seguro de exiliados y desnacionalizados, el restablecimiento de las organizaciones civiles y reformas electorales mínimas para unas elecciones legítimas.**”**

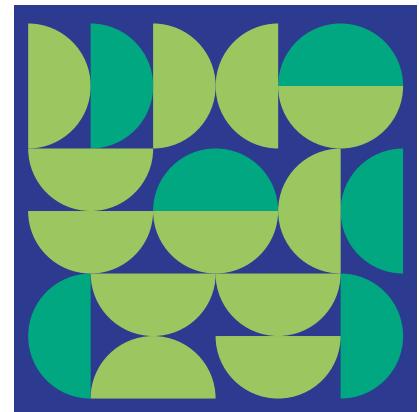


2. Voces Locales

Los nuevos escenarios que se abrieron en Nicaragua y Latinoamérica desde la operación militar norteamericana en Venezuela, generaron opiniones entre la población nicaragüense. En un ejercicio de diálogo e intercambio con activistas locales facilitados por una organización de sociedad civil, la reacción de la gente es de esperanza aunque guarden silencio por la vigilancia y el control del régimen Ortega-Murillo; lo ven como una señal de cambio para Nicaragua en el corto plazo. Entre los empleados públicos de las alcaldías hay temor y se ha incrementado la vigilancia sobre ellos.

Un informe sobre la percepción de los ciudadanos de 40 municipios sobre diferentes aspectos locales realizado durante los últimos meses de 2025 por Hagamos Democracia, ya recogía este sentimiento cuando más del 97% de las personas participantes consideraba que una eventual caída del régimen de Maduro en Venezuela favorecería a Nicaragua.

En otro orden, los resultados más recientes del Índice de Transparencia Internacional vuelven a colocar a Nicaragua como el segundo país más corrupto del continente, solamente superado por Venezuela. La corrupción se ha convertido en una práctica política instalada a todos los niveles, siempre y cuando cuente con el visto bueno de la estructura de poder instalada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Cuando los funcionarios públicos cometan actos de corrupción fuera de lo que les han autorizado, son purgados y “castigados”, en la mayoría de los casos con destituciones e incluso encarcelamientos.



El estudio de Hagamos Democracia muestra que cerca del 78 % conoce casos de este tipo de prácticas en sus localidades; la mayoría de ellas relacionadas con el uso indebido de bienes públicos, nepotismo, licitaciones amañadas y malversación de fondos públicos, entre otras.

Por otra parte, un ejercicio de diálogo e intercambio con activistas locales confirmó estas percepciones. En diferentes municipios se han efectuado cambios y destituciones de alcaldes y otros funcionarios por cometer actos de corrupción, en otras localidades ordenaron

auditorías por muestras evidentes de nepotismo, licitaciones amañadas. La población no está contenta y percibe que los pequeños proyectos de infraestructura que se ejecutan en realidad no contribuyen a mejorar sus condiciones de vida, sino que hacen parte de una estrategia para hacer creer que hay una buena gestión municipal.

Mientras tanto, la corrupción se ha instalado como una práctica endémica de las instituciones públicas a todos los niveles y tiene efectos directo sobre la gestión pública y las condiciones de vida de la población.

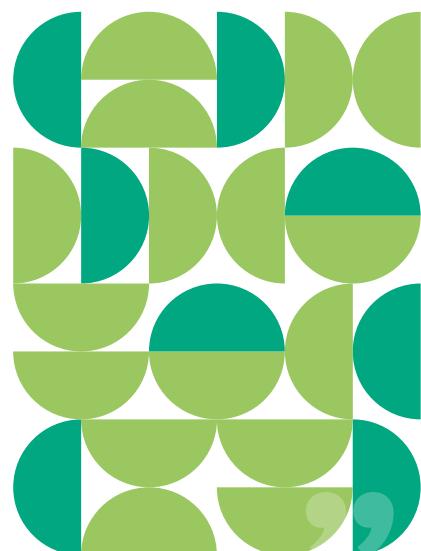
3. Costa Rica: interrogantes poselectorales

Luego de las votaciones efectuadas el pasado 1 de febrero, los resultados electorales dieron como ganadora a Laura Fernández, la candidata por el partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO), tal como se anticipaba en las encuestas previas sobre intención de voto. La campaña se desarrolló en un tono de polarización, pero también de mayor participación electoral que en comicios anteriores.

En la Asamblea Legislativa, el PPSO aspiraba a contar con una bancada mayoritaria de 40 diputados que le permitiera realizar cambios estructurales como reformas a la Constitución y otros similares; sin embargo, alcanzó solamente 31 asientos. Aun así, una mayoría que no se había alcanzado en elecciones anteriores. Para la futura presidenta esta composición parlamentaria representa un desafío frente a la idea que ha promovido de una Tercera República que refunde sectores clave del Estado que, desde su perspectiva, no están funcionando eficientemente.

Desde la perspectiva de algunos especialistas, la idea de la Tercera República es una idea todavía no muy clara que se ha venido construyendo sobre la marcha. De manera que la nueva administración se enfrentará al dilema de gobernar a partir de la confrontación y el discurso anti sistema que sostuvo durante la campaña, o por el contrario, adoptar el camino del diálogo considerando su experiencia de trabajo previa.

De parte de la ciudadanía costarricenses hay expectativas sobre la gestión de gobierno, especialmente en aquellos municipios donde el oficialismo recibió la mayor cantidad de votos, que coinciden con los niveles más altos de pobreza y exclusión. Un sector en el que el actual presidente Rodrigo Chaves logró calar su discurso por el descontento que presentan la salud, la educación y la seguridad en el país. Otras interrogantes que surgen sobre la gestión de Laura Fernández se relacionan con la intención de seguir los pasos del llamado modelo Bukele, en referencia al presidente salvadoreño y su cercanía con la



administración actual. También persisten las dudas sobre si continuarán las tensiones con otros poderes estatales y órganos de control de la administración pública.

Por otra parte, los desafíos están planteados también para la oposición, sobre todo la que tendrá representación en el parlamento. Durante la campaña, los diferentes partidos políticos fueron poco eficientes posicionando

sus propuestas y mensajes ante la ciudadanía; la interrogante es si tendrán la capacidad de conectarse con las expectativas y demandas ciudadanas, empujar una agenda programática y su capacidad de acción conjunta. A medida que el tiempo avanza las interrogantes se van despejando, pero la fecha clave será el próximo 8 de mayo cuando Laura Fernández asuma la presidencia para los próximos cuatro años.

Costa Rica: interrogantes poselectorales

Ganadora: **Laura Fernández**



- 1 Candidata por el partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO), tal como se anticipaba en las encuestas previas sobre intención de voto.
- 2 Obtuvo 31 diputados en la Asamblea Legislativa
- 3 La idea de la Tercera República es una idea todavía no muy clara que se ha venido construyendo sobre la marcha.

Interrogantes

- 1 Intención de seguir los pasos del llamado modelo Bukele
- 2 Persisten las dudas sobre si continuarán las tensiones con otros poderes estatales y órganos de control de la administración pública.

Desafíos

- 1 La nueva administración se enfrentará al dilema de gobernar a partir de la confrontación y el discurso anti sistema que sostuvo durante la campaña, o por el contrario, adoptar el camino del diálogo considerando su experiencia de trabajo previa.
- 2 **Los desafíos de la oposición:** la capacidad de conectarse con las expectativas y demandas ciudadanas, empujar una agenda programática y su capacidad de acción conjunta.